

## REPÚBLICA DE COLOMBIA

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



#### SALA LABORAL

Medellín, julio veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310500620090011701, promovido por la señora **SILVIA CLARET ARREDONDO MARTÍNEZ** contra **COLPENSIONES**, con el fin de dar estudio en el grado de Consulta conforme lo establece el artículo 69 del CPT y SS, en contra de la sentencia condenatoria proferida por, el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **235**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

#### ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, la señora Silvia Claret Arredondo Martínez petitionó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su

hermana la señora Ruth del Carmelo Arredondo Martínez, con los intereses de mora y los gastos del proceso.

Fundamentó sus pretensiones, en que la señora Ruth Del Carmelo Arredondo Martínez estuvo afiliada al ISS durante muchos años y falleció el 10 de julio del año 2008 por causas de origen común. Expuso la demandante que es una persona inválida que siempre dependió económicamente de su hermana, por lo que petitionó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente obteniendo un resultado negativo.

Admitida la demanda y notificada, la accionada dio respuesta al libelo genitor exponiendo:

Que no le constan los hechos narrados en el libelo genitor, pues la carga probatoria de lo que indica la tiene la parte demandante, por lo que se opone a las pretensiones invocadas en su contra y propuso las excepciones de: *“Imposibilidad de condena en costas”*, *“Buena fe”*, *“Prescripción”*, *“Excepción innominada”*, *Compensación”*.

En sentencia del trece (13) de diciembre del año dos mil diez (2010) el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, condenó al entonces Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago a favor de la señora Silvia Claret Arredondo Martínez de la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su hermana la señora Ruth del Carmelo Arredondo Martínez desde el 10 de julio de 2008, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, y ordenó el pago de los intereses de mora establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 15 de febrero del año 2009 y hasta el pago efectivo de la obligación.

### **ALEGATOS**

Corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes hizo pronunciamiento alguno.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

En atención al grado jurisdiccional de consulta, consiste en determinar si le asiste a la señora Silvia Claret Arredondo Martínez el reconocimiento y pago de la

pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte de su hermana la señora Ruth del Carmelo Arredondo Martínez, retroactivo causado e intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

## CONSIDERACIONES

La pensión de sobreviviente tiene como objeto la protección del núcleo familiar del pensionado o afiliado cuando éste falta, con la única finalidad de suplir aquel ingreso económico que por la muerte de ese miembro de la familia ya no se percibe, y que era vital para la subsistencia de los demás.

Bajo ese entendido la Ley 100 de 1993 limitó un listado de beneficiarios en el artículo 47, que posteriormente fue modificada por el artículo 13 de la ley 797 de 2003. Conforme el Registro de defunción allegado con la demanda, se constata que la señora Ruth del Carmelo Arredondo Martínez falleció el 10 de julio del año 2008, momento para el cual, se encontraba vigente la modificación impartida por la Ley 797 de 2003 que a su letra indicó:

*“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

*b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

*Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los*

literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;~~ y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ~~de forma total y absoluta~~ de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

**PARÁGRAFO.** Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.”

Igualmente, para el reconocimiento de la prestación, debe dejarse acreditados los siguientes requisitos por parte del finado afiliado o pensionado:

**“ARTÍCULO 12.** El artículo [46](#) de la ley 100 de 1993 quedará así:

*Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:*

*1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*

*2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:*

*a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;*

*b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.*

***PARÁGRAFO 1o.*** *Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.*

*El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.”*

En sentencia C 556 de 2009, posterior al fallecimiento de la señora Arredondo Martínez, se declaró inexecutable los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Empero, sin que dicha providencia se dispusiera un efecto retroactivo, considera la Sala imperativo inaplicarlo por ser abiertamente **inconstitucional de cara al artículo 4 de la Constitución Política**, pues se plasma en dichos requisitos una exigencia de tipo regresivo en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes que vulnera la progresividad de los derechos sociales, postura, que se ha explicado por la Corte Constitucional como máximo órgano de cierre en

diversas providencias, y la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la N° 73291 del 5 de diciembre de 2018, donde explicó:

*“..Precisado lo anterior y, en lo que atañe con el tema jurídico que se trae a colación, esto es, el requisito de fidelidad al sistema de pensiones, esta Corporación en sentencias CSJ SL 41832, 8 may. 2012, y CSJ SL 42423, 10 jul. 2010, (pensión de invalidez), y luego, en providencias CSJ SL 42540, 20 jun. 2012, y CSJ SL 42501, 25 jul. 2012, (pensión de sobrevivientes), cambió su criterio para señalar que tal exigencia incorporada en las reformas pensionales (Ley 797 y Ley 860 de 2003) del Sistema General de Pensiones, impuso una evidente condición regresiva en relación con lo establecido originalmente en la Ley 100 de 1993, motivo por el cual, los juzgadores tienen el deber de abstenerse de aplicarla, por resultar abiertamente incompatible con los contenidos materiales de la Carta Política, especialmente con el principio de progresividad y no regresividad.*

*Tal decisión no implica darle retroactividad a la sentencia C-556 de 2009, sino, más bien, constituye una expresión del deber de los jueces de inaplicar, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4.º de la CP), las normas legales que sean manifiestamente contrarias e incompatibles con el marco axiológico de la Constitución Política...”.*

Reiterado en muchas otras como CSJ SL12489-2016, SL9250-2016, CSJ SL607-2018. De este modo, para esta Sala, es claro que, por resultar contrario a la Constitución Nacional, la aplicación de los literales a y b del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 no debe darse; siendo el único requisito por cumplir, 50 semanas en los tres (3) años anteriores al fallecimiento.

Con la historia laboral remitida por el entonces Instituto de Seguros Sociales al proceso, se corrobora que la señora Ruth del Carmen Arredondo Martínez para el momento de su fallecimiento ostentaba la calidad de afiliada, y entre el 10 de julio del año 2005 y el momento de su fenecimiento había cotizado un total de 154.2 semanas, dejando acreditado el derecho a la pensión de sobreviviente en cabeza de sus beneficiarios, de haberlos.

Procede la Sala entonces, con la valoración de los elementos probatorios allegados, de cara a establecer si la señora Silvia Claret Arredondo Martínez tiene o no la calidad de beneficiaria que peticiona.

De las partidas bautismales incorporadas al plenario se constata el parentesco existente entre la señora Silvia Claret Arredondo Martínez y Ruth del Carmelo Arredondo Martínez, ambas hijas de Gabriel Arredondo y Amelia Morales.

Testimonios recepcionados en audiencia:

**Señora María Eugenia Gonzáles Osorio:**

*“Ruth era la hermana mayor de Silvia, ella Ruth era prácticamente como la mamá de Silvia, los padres de ellas murieron y Ruth siguió con el rol de papá y de la mamá para con Silvia; Ruth era quien le daba todo a Silvia, ella dependía económicamente en un todo de Ruth, Ruth le proporciona a Silvia comida, vivienda vestuario, droga amor y compañía, le daba todo era un par de viejitas que compartían todo”... “doña Silvia no ha trabajado, siempre dependió de su hermana Ruth”... “Silvia vive ahora de mandados que hace, de confites que vende, de la ayuda de la gente”.*

**Astrid Elena Ruiz**

*“Ruth y Silvia eran hermanas, siempre vivieron juntas, vivieron en el barrio córdoba, allá actualmente sigue viviendo Silvia; Silvia siempre dependió económicamente de Ruth, ella le daba la comida, la vivienda la ropa, siempre dependió de un todo de Silvia. Silvia nunca ha trabajado, ella lo que hace es mandados, vende dulces”*

Mediante valoración de la pérdida de capacidad laboral de la demandante, decretada por el despacho y efectuada por el Junta Regional de Calificación de Invalidez, se colige que la demandante cuenta con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 64.14%, que estructuró el médico valorador el 1 de Julio del año 2008 y que fundamentó de la siguiente manera:

*“Al evaluarla se niega inicialmente al examen médico se le insiste y se encuentra una lesión ulcerosa que compromete todo el humiteras anterior derecho ulcerosa hasta planos óseos de parrilla costal con rebordes levantados duros, correspondiente esta úlcera que ha consumido todos los tejidos blandos de tórax derecho a una lesión tumoral maligna de mama, que se inicio como una bolita y ahora presenta el estado actual usa una panoli que “rellena” el*

*defecto tisular. Hay además adenomengliarias axilares (del tejido que queda) con linfoedema duro de todo miembro superior derecho, sin limitación de movimientos, adicionalmente se encuentra inflamación en las articulaciones metacarpofalngica con flogosis y rigidez desviación cubital”*

*Al analizar las lesiones de tórax (ca de mama) es completamente claro e innegable que tales lesiones tienen una evolución MUY LARGA, sin duda existía tumor en estado avanzado desde hace muchísimo tiempo...”*

Conforme el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera en estado de invalidez aquel que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada de manera intencional, cuente con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En el caso que nos ocupa es innegable que la valoración médica da cuenta no solo de una dificultad para el desempeño de labores diarias en atención a la artritis reumatoide de la demandante, sino también también de un estado avanzado de tumor maligno de mama que ha tenido repercusiones indudablemente nefastas en el día a día de la paciente, con lo cual, ante el porcentaje dado por el calificador de 64.14%, se considera que la señora Arrendondo Martínez para la fecha de fallecimiento de su hermana la afiliada Ruth del Carmelo, tenía la calidad de inválida.

Sumado a lo anterior, debe indicarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando se trata del derecho a los hermanos imposibilitados de trabajar, explicó que dicha situación debe entenderse también por el paso del tiempo, por la “ancianidad” del protegido, así lo recalcó en la sentencia SL 331 de 2021 donde explicó:

“En esa perspectiva, el término «*hermanos inválidos*», contenido en el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 debe ser comprendido a partir de la regla contenida en el artículo 38 de la misma normativa, en la medida que en esta disposición el legislador indicó el presupuesto que debe darse para que una persona pueda considerarse en situación de invalidez en el ámbito de la seguridad social.

Por tanto, la Sala no ha aceptado como válidas aquellas posturas interpretativas que intentan demostrar que el concepto de «*persona afectada de*



*invalidéz» contenido en la norma en referencia solo opera para los casos de la pensión de invalidez, pero no necesariamente para la pensión de sobrevivientes, en la medida que en este caso la invalidez podría derivarse de otras causas derivadas del paso de la edad o «ancianidad».*

Lo anterior, bajo un argumento teleológico, por cuanto la Ley 100 de 1993 estableció un sistema de seguridad social integral con criterios científicos unificados y consciente de que la protección dada por el legislador es realmente a la invalidez del beneficiario y no a «*otras situaciones que eventualmente puedan generarle un estado de desprotección*». Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL, 10 jun. 2008, rad. 30720 la Sala precisó:

*En verdad, limitar tal definición a la pensión de invalidez -como lo pregona el recurrente- sería desconocer que la Ley 100 de 1993 estableció un sistema de seguridad social integral, que comporta todo un conjunto armónico de políticas, instituciones, normas, procedimientos y técnicas, cuyo propósito indeclinable es el de mejorar la calidad de vida de los colombianos.*

*Un sistema de seguridad social integral, organizado al compás de modernas tendencias de la seguridad social, con un claro objetivo de unificación, que pusiera fin a la dispersión de regímenes que caracterizó la seguridad social en Colombia y que evitara la diversidad de interpretaciones, no consiente que la noción de invalidez, concebida al amparo de rigurosos parámetros de la ciencia y de la técnica, que consulta novedosos criterios como los de deficiencia, discapacidad y minusvalía, con causa en la contemplación del hombre en sus dimensiones física, cultural y social, se limite a un solo aspecto de un complejo sistema (...).*

*Admitir tal postura podría conducir a la absurda situación de que, en el caso de los adultos mayores, sólo la interdicción por demencia declarada judicialmente les daría la calidad de inválidos, en atención a que, a la luz de las normas del derecho común, los mayores de edad son plenamente capaces mientras no medie declaración judicial de interdicción, que los convierta en incapaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.*

*Obviamente no desconoce la Corte que a una persona de avanzada edad que no ha trabajado, por múltiples razones, le es ciertamente difícil comenzar a procurarse los medios para su subsistencia, pero ello no significa que por esa sola circunstancia se le pueda*

*considerar, en los términos exigidos por las normas legales, como inválida, en la medida en que, en estricto sentido, no existe una pérdida de su capacidad laboral.*

*Importa anotar que el parágrafo del artículo 4o del Decreto 917 de 1999, contentivo del manual único para la calificación de la invalidez establece:*

*“Las consecuencias normales de la vejez, por sí solas, sin patología sobreagregada, no generan deficiencia para los efectos de la calificación de la invalidez en el Sistema Integral de Seguridad Social”.*

*Y, como quedó dicho, lo que protege específicamente la Ley 100 de 1993 al reglamentar la pensión de sobrevivientes es la invalidez del beneficiario y no otras situaciones que eventualmente puedan generarle un estado de desprotección.*

Es así pues, como con los testimonios escuchados en audiencia, queda claro que la señora Silvia Claret dependía en un todo y por todo de su hermana Ruth Del Carmelo Arredondo Martínez, quien obtenía sus ingresos del trabajo de modistería en casa y siempre veló por las necesidades de la aquí demandante, quien nunca fue económicamente autónoma y en virtud de ello, ostenta la calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente deprecada.

### **Intereses moratorios:**

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prescribe que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la normatividad mencionada, la entidad administradora correspondiente debe reconocer y pagar al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Sobre su procedencia, en sentencia SL 1370 de 2020 se precisó que no operan en los siguientes casos:

*“1. El derecho pensional reclamado se hubiese causado antes de la vigencia de esa ley, es decir, previo al 1º de abril de 1994 (CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 34358).*

*2. Existe una nueva liquidación que genere un mayor valor o diferencias en la mesada pensional (CSJ SL 6 dic. 2011, rad. 30852 y CSJ SL17725-2017).*

*3. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).*

*4. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).*

*5. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018.*

*6. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).*

*7. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014”.*

Toda vez que, en el presente caso nos encontramos dentro de las excepciones de no procedencia de los intereses moratorios, por la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema, pues la finada afiliada cotizó solo 10 años en fecha anterior a su fallecimiento, no es procedente lo peticionado.

Respecto a la indexación, en sentencia SL 359 de 2021, la Sala de Casación Laboral, expuso:

*“Debe insistirse en que la indexación no aumenta o incrementa las condenas, sino, más bien, garantiza el pago completo e íntegro de la obligación. Sin la indexación, las condenas serían deficitarias y el deudor recibiría un menor valor del que en realidad se le adeuda, premisa que tiende a agudizarse en tiempos de crisis y congestión judicial.*

*En suma, la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral.*

*Por lo visto, a partir de esta sentencia la Sala fija un nuevo criterio, para establecer que el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa y, en tal sentido, recoge la tesis que hasta ahora sostenía, según la cual tal corrección monetaria únicamente procedía a petición de parte, postura que se encuentra entre muchas otras, en sentencias CSJ SL, 17 jun. 2005, rad. 24291, CSJ SL, 14 nov. 2006, rad. 26522, CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 41471, CSJ SL, 6 feb. 2013, rad. 42973.”*

En atención a ello, y siguiendo el lineamiento del máximo órgano de cierre de esta especialidad, se ordenará el pago de las mesadas pensionales debidamente indexadas.

Ante los nuevos hechos enunciados, y teniendo en cuenta que la prestación debe concederse de acuerdo al salario mínimo legal mensual vigente, de cara al artículo 48 de la Ley 100 de 1993 la ser las cotizaciones de la finada afiliada todas sobre dicho valor, se modificará el retroactivo pensional, el cual, a la fecha de la muerte de la demandante ascendía a la suma de: \$19.539.500, valor que se concede en favor de la masa sucesoral de la señora Silvia Claret Arredondo, debidamente indexado al momento del pago oportuno.

Así las cosas, se Modificará, Revocará y Confirmará la sentencia de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: Modificar** el retroactivo pensional, en suma, de \$19.539.500, limitándolo hasta el 7 de mayo del año 2011, fecha de fallecimiento de la demandante, valor que se reconoce en favor de la masa sucesoral de la señora Silvia Claret Arredondo, y deberá ser indexado al momento del pago oportuno de la obligación.

**SEGUNDO: Revocar** la condena de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

**TERCERO: Confirmar** la sentencia en todo lo demás.

**CUARTO:** Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0a0e27e4e592ce09bf181d6273f94e13ed0d223057e62c6dce586699016c9d42**

Documento generado en 28/07/2023 03:18:03 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**